

editorial | LA HUELGA NACIONAL

Unánime fue la paralización de las actividades económicas del país el lunes 7 de noviembre del presente año. Cuatro días antes la Central Unica de Trabajadores había convocado a una concentración pública para reclamar el reajuste de las remuneraciones de acuerdo con el alza del costo de la vida. Al término del mitin se improvisó un desfile que la fuerza pública disolvió, violentamente, de resultas de lo cual murieron el obrero Vladimir Tobar y el empleado Ernesto E. Valenzuela y quedando varios otros trabajadores heridos y contusos.

El fondo de la protesta del trabajo organizado ha sido la política económica que obstinadamente sigue la actual administración por consejo y presión de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, agencia en que predominan los intereses del alto capitalismo financiero mundial.

Esta desastrosa política se viene aplicando en Chile desde 1956 y ha sido continuada con renovado vigor por el actual gobierno de gerentes de empresas privadas y cuyos efectos palpa día a día la clase asalariada. La inflación se ha estabilizado, pero el índice del costo de la vida ha subido estos últimos años en más de un 40% de acuerdo con las estadísticas oficiales; el desempleo de más de cien mil chilenos lo atestiguan encuestas solventes; el déficit del presupuesto fiscal es tremendo, como lo reconoce el propio Ministro de Hacienda; el estancamiento de la producción manufacturera y fabril es comprobado por los propios interesados y, en general, el ritmo de capitalización del país y la producción de bienes y servicios se mantienen en los mismos niveles desde hace diez años. Podrá argumentarse que el terremoto que devastó la zona sur del país contribuyó a esta realidad; pero este fenómeno natural sólo agravó la situación creada por una política económica regresiva para el pueblo chileno, como queda de manifiesto en las críticas que se han formulado a la actual gestión presidencial.

¿A quién o a quiénes favorece esta desastrosa política que está hundiendo al pueblo de Chile? ¿Cómo se explica la contumaz persistencia de una serie de medidas que ni siquiera han ido controlando o por lo menos paliando el proceso inflacionario, que azota al país desde hace decenas de años, a tan alto precio para la economía y bienestar nacionales?

No cabe la menor duda que entre los sectores regalones del Ejecutivo están las grandes compañías del cobre. Se les ha mantenido el régimen legal de "Nuevo Trato" instaurado en 1955, lo que le ha significado al país una pérdida anual de más de veinte millones de dólares por concepto de menores entradas por impuestos, divisas, adquisiciones con cambios propios, etc., en

relación a la tributación anterior al actual sistema. Estas menores entradas no se han compensado en lo más mínimo con las inversiones que estas corporaciones foráneas han hecho en el país. Como si esto fuera poco, las compañías del cobre están presionando para que se les otorgue un trato más preferencial que el existente como condición para hacer nuevas inversiones. En la misma situación privilegiada han sido consideradas las empresas salitreras y del hierro. Estos grupos de intereses han sido totalmente marginados de la ley de reconstrucción de la zona sur, donde habrían tenido la oportunidad de aportar algo al progreso nacional.

En el campo nacional, los grandes beneficiados han sido las firmas exportadoras, los bancos y algunos monopolios industriales que se dedican a vender al exterior, por ejemplo, las fábricas de papeles y cartones. El criterio del gobierno ha sido dar una amplia libertad de precios para que las empresas privadas ganen el máximo de utilidades que le permita el ordenamiento económico, porque cree, ingenuamente, que el sector empresario destinará parte de sus ganancias para capitalizarlas en las industrias y, por ende, crear nuevos empleos y no malgastar ese excedente en artículos suntuarios importados como acostumbran hacerlo. El estancamiento de la producción y la detención del ritmo del desarrollo económico del país es la respuesta a estas candorosas medidas económicas.

Ha sido la política de remuneraciones que en consonancia con las demás medidas económicas ha venido aplicando el Supremo Gobierno la que han sentido en carne propia los asalariados chilenos. El gobierno ha recurrido a los medios neomalthusianos para reducir a los trabajadores a la miseria y obtener el máximo de ganancias para sus sostenedores. La congelación de sueldos, salarios y jornales a los niveles de 1959, el aumento sustancial de los impuestos indirectos que gravan a los consumidores, el 1% de impuestos a las remuneraciones que establece la ley de la reconstrucción, el desempleo real de más de cien mil chilenos y la cesantía parcial de otros tantos de miles de seres, la intención de reducir a niveles mínimos la seguridad social, el aumento de los índices de morbilidad, analfabetismo, criminalidad, etc., revelan en forma generosa el estado de creciente pauperización del pueblo chileno, lo que hipoteca seriamente el porvenir de las nuevas generaciones.

Esta realidad económica y social es la que ha hecho exclamar al Jefe del Estado y a sus corifeos áulicos que en Chile se ha restaurado la "moral" en los negocios privados y públicos, es decir "su moral", que no es otra que obtener más, más y más dinero...

Contra esta realidad inmoral por lo inhumana y antinacional fue que las fuerzas del trabajo organizado detuvieron la marcha económica del país el lunes 7 de noviembre. La Central Unica de Trabajadores, con el apoyo de sus federaciones nacionales y organismos de base, se pronunció esta vez por una huelga nacional de protesta.

Al término del movimiento, la directiva nacional de los trabajadores hizo entrega al Presidente de la República de un memorial que condensa las más sentidas reivindicaciones de los asalariados chilenos, éstas son: el reajuste en un 100% de acuerdo con el alza del costo de la vida de todas las remuneraciones de los trabajadores tanto del sector público como privado; fijación del sueldo vital para los empleados particulares; fijación del salario mínimo de E° 2 diarios para los obreros y los campesinos; asignación familiar obrera de E° 5 por carga y reajuste a las demás; solución a los conflictos pendientes; que no se tomen represalias y se conceda una indemnización a los familiares de las víctimas caídas en los sucesos del 3 de noviembre.

El Ejecutivo ha contestado a estas justas peticiones en una extensa carta donde reafirma una vez más sus ya conocidos argumentos para defender su política que es la que creó las condiciones que hicieron posible la huelga

general. Por otra parte, ha iniciado acciones judiciales que han llevado a la cárcel al presidente de la Central Unica de Trabajadores. En una palabra, una vez más estamos presenciando "un empate social" cuyo desenlace se verá en los próximos meses.

Como siempre ha sucedido, la lucha sindical se traslada del plano meramente económico al terreno político y es ahí donde aparecen las discrepancias de estrategias y tácticas de las distintas tendencias que militan en el campo del sindicalismo y gremialismo nacionales. Hay quienes estiman que se pueden obtener las conquistas sociales dentro de los marcos de la democracia formal actual, planteando la lucha dentro de las normas jurídicas vigentes para la resolución de los conflictos laborales, pero se olvidan de las experiencias y aun de las más recientes en las que han sido las huelgas legales las que más se han prolongado, a saber, carbón, salitre, cobre, fundiciones, etc., en las que el gobierno se ha restado a sus funciones legales y, por el contrario, ha estimulado su prolongación. Los que mantienen esta política estiman que es el precio que debe pagarse por la "coexistencia pacífica" muy necesaria en el campo internacional, pero terriblemente desastrosa para el progreso social de los países en desarrollo.

El socialismo ha planteado claramente su posición: defenderá la unidad de los trabajadores por sobre todas las cosas, impulsará enérgicamente la plataforma de lucha de la huelga nacional y tratará de crear las condiciones que permitan al país salir del marasmo económico en que se debate, sacar de la miseria y la opresión a los siete millones de chilenos y realizar las transformaciones fundamentales que coloquen a la nación en la ruta del progreso y de la auténtica democracia.

Para cumplir esta tarea, el socialismo debe sacudirse de una vez por todas de pequeñas tareas marginales, de sus hábitos de tipo parlamentario, de centrar la lucha de los trabajadores en determinados aspectos particulares de la vida nacional, para vaciarse, en cambio, en los grandes movimientos de la opinión, en el alud de las fuerzas populares que, lenta pero persistentemente, se están movilizandó tras la conquista de su pan y de su libertad. El papel del socialismo es dinamizar el contenido de las reivindicaciones de las masas, dirigir sus pasos hacia el frente de la lucha social, cautelar los intereses verdaderos del pueblo y servir de guía a los trabajadores en su marcha al poder.

Si el socialismo está plenamente consciente del fracaso del gobierno en su política económica y social y está decidido a asumir responsabilidades de mando, como clase, como partido y como gobierno, es decir, si está dispuesto a pasar de la simple contemplación de los acontecimientos al ataque vigoroso contra la reacción, en forma coordinada, sistemática y revolucionaria, no le cabe otra actitud que estimular, orientar y participar activamente en los movimientos sociales del proletariado, a fin de que ellos dejen de ser simples huelgas de resistencia legal para transformarse en un medio objetivo de la conquista del poder.

La lucha de clases es, en la época moderna, el factor dinámico por excelencia de la vida histórica. Le corresponde al movimiento sindical y político de los trabajadores hacer funcionar aceleradamente este motor de la vida contemporánea; indudablemente una política audaz y visionaria chocará con los moldes anticuados que aún perduran en Chile, escaparates de nuestra realidad atrasada y dependiente, y exigirá nuevas acciones más definidas de los trabajadores para conquistar el bienestar y la libertad. El papel del socialismo es hacer comprender a los trabajadores esta nueva responsabilidad del movimiento social y político, y conducirlos a la victoria.

J. B. S.